

“Estamos pidiendo una revolución democrática pacífica. Debíamos tener en cuenta que semejante acontecimiento sería único en la historia, particularmente en regiones donde la opresión, la explotación, la pobreza y la discriminación se hayan establecidas desde hace muchas generaciones. Una tal revolución democrática —si es que puede realizarse— podría llevar al poder a gobiernos democráticos cuya posición

se halle a la izquierda del centro. En otras palabras, lleva al ascenso y al poder a partidos políticos liberales, progresistas e incluso radicales”.

Lo que la izquierda latinoamericana se está preguntando ahora es qué tan radical permitirá EUA que sea el gobierno radical producido por su propia política.

LA FILOSOFÍA DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO

Por TAD SZULC (*)

UNA CONTROVERSI A PELIGROSA

LA filosofía implícita en la ayuda prestada por EUA a los países latinoamericanos de acuerdo con la Alianza para el Progreso se está convirtiendo en el tema de una controversia altamente peligrosa. Participan en la discusión los empresarios estadounidenses y la opinión pública latinoamericana, y la polémica gira en torno a los papeles relativos de la inversión privada y la ayuda fundamental en el desarrollo del hemisferio. La administración Kennedy queda encerrada sin defensa alguna en medio de ambos contendientes. La controversia ha conducido a que se hagan acusaciones de “imperialismo económico” contra Estados Unidos de Norteamérica y de “socialismo” tanto a los latinoamericanos como a la administración reformista del Presidente Kennedy. Las personas razonables de uno u otro bando convienen básicamente en que lo mismo la inversión privada que los préstamos de gobierno a gobierno son de vital importancia y debieran ser mutuamente complementarios.

La controversia es peligrosa porque ha creado ya problemas políticos en América Latina y en EUA, los cuales sólo pueden debilitar el concepto de la Alianza.

Por lo que a las empresas norteamericanas se refiere, uno de los principales factores a considerar en la situación es el actual estatuto, el futuro y el carácter de las inversiones privadas de capital estadounidense en América Latina que montan aproximadamente a Dls. 12,000 millones. El punto de vista del sector de la empresa norteamericana consiste en que, en tanto que esas inversiones son la sangre que da vida a la economía latinoamericana, las condiciones políticas prevalentes en el hemisferio y las políticas reformistas “socialistas” de la administración de EUA tienden a desalentar a ese capital privado. A ese respecto, se han ofrecido cifras que demuestran la alarmante reducción de la corriente de nuevas inversiones y se ha exigido de la administración norteamericana que tome medidas para restaurar un clima propicio para el capital.

En la discusión para decidir si las inversiones privadas norteamericanas en América Latina son suficientes para estimular el ritmo de expansión económica de la región y si se requiere la acción de Washington para estimularlas, las conclusiones dependen en muy amplia medida de las interpretaciones elegidas por los analistas.

El grupo empresarial sostiene que la afluencia anual de inversiones ha venido declinando a partir de 1957 y que este hecho pone de relieve la gravedad de la situación. Aunque esto es verdad en términos absolutos, las cifras necesitan una explicación. Las estadísticas sobre inversiones correspondientes a 1957 —por ejemplo— se vieron infladas por los pagos especiales de nuevas concesiones petrolíferas en Venezuela, circunstancia que es improbable se repita. Al mismo tiempo, una parte de lo que los empresarios llaman “desinversión” (1) actual está constituida por las remisiones de utilidades hechas por las compañías petroleras que operan en Venezuela a sus oficinas centrales, afectando sobre todo a la balanza de pagos de ese país en el renglón de dólares, más bien que a la posición del capital en tanto que inversión. De modo semejante, miles de millones de dólares afluyeron entre 1956 y 1960 a Brasil para establecer la base de su impresionante crecimiento industrial. En el caso brasileño se ha presentado un fenómeno de saturación de la inversión, independientemente de las recientes inquietudes políticas. En otras palabras, la

economía brasileña necesita digerir aún las inversiones e masa efectuadas durante los últimos años.

Las raíces del problema se localizan en la decisión de la administración Kennedy, adoptada poco después de su llegada al poder en 1961, en el sentido de lanzar la Alianza para el Progreso basándola en un nuevo enfoque del desarrollo para América Latina. Esa nueva política representó una ruptura total con las tradiciones. En tanto que la filosofía anterior del programa de ayuda a Latinoamérica se basaba en la noción de que ésta podría desarrollarse mejor mediante las inversiones privadas, complementadas cuando fuese necesario por préstamos oficiales destinados a proyectos industriales específicos y a cubrir sus déficits de balanza de pagos, la política de la “Nueva Frontera” mantenía todo un nuevo sistema de valores. La administración Kennedy puso un programa basado en grandes préstamos gubernamentales para el desarrollo, en la insistencia en la realización de reformas internas fundamentales en los países latinoamericanos y en la centralización de la planeación económica a escala nacional y continental. La idea subyacente en este enfoque de la Alianza consistía en que esas políticas renovadoras crearían una nueva estructura económica y social en Latinoamérica.

Traducida a cifras programadas, la Alianza preveía aproximadamente Dls. 1,000 millones en fondos públicos de EUA inversiones que deberían ser acompañadas por cuando menos Dls. 300 millones anuales de nuevas inversiones privadas.

La filosofía de este programa fue aclamada en general en América Latina como la iniciación de una nueva era en las relaciones de los países de la región con EUA. Sin embargo, muy pronto empezó a surgir la oposición a este concepto de la Alianza entre el grupo conservador latinoamericano —integrado principalmente por clases de terratenientes y empresarios tradicionales— que tenían las ideas reformistas de los planificadores de la administración Kennedy en el campo de las transformaciones agrarias y de las reformas fiscales. Además, desde un principio se presentó también la oposición de los intereses empresariales norteamericanos preocupados por la seguridad de sus inversiones tradicionales. Aunque estos puntos de vista han venido siendo expresados con cada vez mayor frecuencia, en América Latina y EUA encontraron su más cabida expresión a principios del año en curso en los informes rendidos por los miembros del “Comité de Comercio de la Alianza para el Progreso”, que es un grupo de grandes empresarios designados por el Departamento de Comercio estadounidense para que recomendaran métodos tendientes a incrementar la participación del capital privado norteamericano en el desarrollo del hemisferio y en el contexto del programa global. En efecto, un memorándum por separado, formulado por tres miembros del comité, y un informe conjunto elaborado por el Grupo en pleno, propuso que la administración cambiara el acento de su política de la ayuda gubernamental a la inversión privada. El informe del Comité en pleno citaba a empresarios latinoamericanos que denunciaban que EUA estaba exportando “ideas socialistas”, y declaraba que si bien los préstamos y subvenciones son importantes “el capital privado, con su mayor eficacia y mucho más grande potencial, es esencial y constituye el

países latinoamericanos. El estudio se refiere al año de 1959, es decir, antes de la ALPRO y de los diversos acontecimientos que tanto han cambiado en años recientes el panorama latinoamericano, pero acusan una distribución entre los países latinoamericanos que ha permanecido en lo general aunque el nivel haya crecido. El estudio presenta cifras de las remesas de utilidades e intereses por habitante y las cifras respectivas son: Argentina, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Bolivia y Honduras enviaron en 1959 Dls. 2 por habitante; Brasil, Colombia y Costa Rica enviaron de Dls. 2 a Dls. 4; Perú, Cuba, República Dominicana y Ecuador de Dls. 4 a Dls. 10, y Chile, Venezuela y México más de Dls. 10. En el año de referencia el total de remesas de las 20 repúblicas latinoamericanas fue de Dls. 1,171 millones. (N. de la R.)

(*) En el *New York Times* de Abril 14 de 1963.

(1) Un estudio elaborado por la OEA, apoyándose en el Boletín Mensual de Estadística de las Naciones Unidas y en el *Balance of Payments Yearbook*, del Fondo Monetario Internacional, presenta un enfoque útil de esta “desinversión” derivada de las remesas de utilidades e intereses de los

factor básico de sostenimiento a largo plazo que puede mantener un acelerado ritmo de crecimiento". (2)

Las implicaciones filosóficas de estas recomendaciones no fueron pasadas por alto en Latinoamérica y se desató una tormenta de protestas en la que participaron incluso grupos de posición media normalmente pro-norteamericanos. Los comunistas y sus simpatizantes reaccionaron con una actitud de "nosotros se los dijimos". Sobre bases prácticas y realistas, los latinoamericanos —así como algunos economistas estadounidenses sumamente respetados— se sintieron profundamente defraudados por los puntos de vista del Grupo de empresarios. Replicando al argumento del comité en el sentido de que entre el 70 y el 80% de la actividad económica latinoamericana se basaba en la empresa privada —y en las inversiones norteamericanas— señalaron que una gran parte de esa actividad ha sido tradicionalmente de una naturaleza predatoria.

Mientras la controversia en cuanto a si son mejores las inversiones privadas que los préstamos gubernamentales prosigue, para los inversionistas estadounidenses se acerca al momento de tomar su propia decisión, relativa a que puedan o no participar también en el espíritu de la nueva era y cooperar racionalmente al desarrollo de América Latina para el beneficio de ambas partes.

(2) Mayores informaciones y comentarios al respecto pueden leerse en el artículo "La polémica de Peter Grace y David Rockefeller sobre la Alianza para el Progreso" por Enrique Ruiz García, que apareció en *Comercio Exterior* de marzo, 1963. El 9 de abril Peter Grace confirmó su posición declarando en una conferencia de prensa que "las inversiones en América Latina no tropezaron nunca con un ambiente tan desfavorable como el actual, puesto que ahora los riesgos son muy grandes y el rendimiento muy bajo". Preciso Grace que la vacilación que demuestran las empresas

privadas de Estados Unidos para invertir en América Latina, se debe a las siguientes razones: 1) El temor de que los comunistas tomen el poder; 2. Los tipos de interés extremadamente reducidos y que ascienden a menos de una tercera parte de las ganancias obtenidas en Europa o en los Estados Unidos; 3) A las frecuentes e importantes devaluaciones de las diversas monedas nacionales.

Grace se mostró convencido de que podría restablecerse la confianza del capital privado, si el gobierno de Estados Unidos adoptara las recomendaciones del informe relativo a concesiones del fisco a las empresas privadas, como por ejemplo, la disminución de los impuestos en proporción a la devaluación de las monedas nacionales.

Por otra parte, Peter Grace estimó que la ayuda de Estados Unidos a América Latina en el marco de la Alianza para el Progreso, se concentra demasiado en las actividades gubernamentales.

En su opinión, la empresa privada debería colaborar directamente con los cuatro sectores más vulnerables de América Latina: los sindicatos obreros, los estudiantes, los campesinos y los habitantes de las "villamiserias".

David Rockefeller, por su parte, ratificó su posición unos días después —abril 23— al declarar que para que la ALPRO tenga éxito "es preciso que descansa en la fundación de la empresa privada que engendra aproximadamente 80 por ciento de la renta de América Latina".

Rockefeller afirmó después que una "medida indispensable" para atraer capitales nuevos —norteamericanos y extranjeros— es la de crear un clima favorable a las inversiones.

"Son necesarias medidas prácticas para producir una estabilidad razonable en los precios, y tienen que suprimirse los controles y reglamentos que ponen trabas a la empresa privada y apoyan a los monopolios locales".

El banquero subrayó luego que las medidas para mejorar el clima de inversiones varían de un país a otro y propuso que se creen comités consultivos de negociantes para trabajar en común con las organizaciones gubernamentales encargadas de aplicar la Alianza para el Progreso.

Luego, expresó que apoyaba los esfuerzos emprendidos para ampliar el programa de garantía de las inversiones y estimular esta colocación de capitales privados en las regiones en vías de desarrollo, concediendo ventajas fiscales.

"Además de estos estimulantes de la actividad económica —terminó— opinó que Estados Unidos debería dar a entender a los países latinoamericanos que somos francamente partidarios de los cambios constructivos que el progreso económico comprende inevitablemente. La mayor parte de las regiones del mundo en vías de desarrollo desea ardientemente estos cambios". (N. de la R. según cable de la AFP).

ENTRE EL INFORME CLAY
Y EL INFORME DEL BANCO
INTERAMERICANO

AMERICA LATINA ANTE LA URGENCIA

"El Informe Clay muestra poca evidencia de un conocimiento serio de los actuales problemas de América Latina para emerger de su pasado a la edad moderna. Existe en el Informe, además, una considerable confusión ideológica puesto que parece señalar que la única alternativa frente al comunismo es el sistema de la empresa privada norteamericana.

"Esto no es verdad. Hay muchas formas de economía intermedia —algunas con excelente éxito en Europa— que son completamente diferentes tanto del comunismo soviético como del capitalismo norteamericano. Nos guste o no gran número de países latinoamericanos están discutiendo hacia una u otra forma de economía intermedia y no deberíamos darles la impresión de que somos incapaces de comprender la causa por la cual toman ese camino..."

WALTER LIPPMANN
en el "Washington Post", 26-3-63

Por ADOLFO FIGUEROA E.

Una clarificación necesaria

SERIA pueril considerar el Informe Clay como un documento en el que se plantea el problema de la ayuda económica y la asistencia técnica como el resultado de un estudio abstracto, esto es, fuera del contexto especial de la propia política interior norteamericana donde —como es bien sabido— la ayuda exterior encuentra enormes dificultades para traspasar las barreras del Congreso. Por lo tanto, y en virtud de ello, sería preciso tener en cuenta estos hechos —que son los límites en que se ha movido el Comité Clay— antes de adentrarse en los resultados, definiciones y proyecciones que se desprenden del documento.

La estrategia "interior" en EUA

En el número del mes marzo de *Comercio Exterior* se advertía que el Comité Clay —Committee to Strengthen the

Security of Free World— estaba compuesto por un importante grupo de personalidades, muchas de las cuales han formado parte de la administración republicana. Por tal causa todo hace pensar que el Presidente Kennedy, al crear este *staff* de información especial para la Casa Blanca, intentaba, con inteligencia, dos cosas al mismo tiempo: escuchar e incluir la voz de la oposición republicana en su propio equipo y adelantarse estratégicamente —con una crítica al sistema de la ayuda exterior— a la actitud del propio Congreso. Esta tesis puede ser considerada válida si se atiende al hecho mismo de que la *reducción* recomendada por el Comité Clay ha sido escuchada por el Presidente y, con ello, se puede desarmar, en parte, la reacción adversaria contra la "foreign aid".

Ahora bien, tales cuestiones de política interior no alteran la importancia capital del tema. La ayuda internacional sigue siendo uno de los planos fundamentales de la vida universal y, por ello mismo, en esa dimensión tiene que ser entendida. Es cierto que los norteamericanos se quejan de que